

Enrique Maurer Somolinos
Director General

Sal. DGNL.: 1539/23

N.º EXPEDIENTE: 00001-00082895

Con fecha 6 de octubre de 2023 quedó registrada en el Portal de la Transparencia la solicitud formulada por D. con número de expediente 00001-00082895, por la que solicita lo siguiente:

“en relación con las convocatorias de plazas de controlador/a de tránsito aéreo publicadas en BOE en los años 2016, 2017 y 2018 (con ref. BOE-B-2016-18723, BOE-B-2017-62330 y BOE-B-2018-51935 respectivamente), se solicita la siguiente información referente a los candidatos/as seleccionados/as (de acuerdo a la LOPD-GDD aplicable), de modo que resulte trazable para cada una de las convocatorias mencionadas:

- *Número obtenido en el ranking final de la convocatoria de cada candidato/a seleccionado/a.*
- *Destino asignado a cada candidato/a seleccionado/a.*
- *Fecha en la que el/la candidato/a seleccionado/a remitió todos los documentos a ENAIRe (licencia alumno controlador, anotaciones de idioma, certificado clase 3) para acreditar el cumplimiento con:*
 - o Convocatoria 2016: la base 4.2, según lo expuesto en el punto 11 “CONTRATACIÓN - MODALIDADES DE INCORPORACIÓN A ENAIRe” de las enunciadas bases que regían el proceso de selección.*
 - o Convocatorias 2017 y 2018: la base 3.2, según lo expuesto en el punto 10 “CONTRATACIÓN - MODALIDADES DE INCORPORACIÓN A ENAIRe” de las enunciadas bases que regían el proceso de selección.*
- *Fecha efectiva en la que ENAIRe procedió a la contratación de cada candidato/a seleccionado/a.”.*

Respuesta de ENAIRe

ENAIRe accede parcialmente a la petición:

- 1. Respecto de los años 2017, 2018 y 2019, se facilita:**

- Número obtenido en el ranking final de la convocatoria de cada candidato/a seleccionado/a.
- Destino asignado a cada candidato/a seleccionado/a.

Al tratarse de documentación que ENAIRe publicó en su página Web en el momento que se resolvieron las convocatorias señaladas.

La documentación que se acompaña a esta resolución contiene datos de carácter personal con arreglo a la definición de los mismos establecida en el artículo 4.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 – Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), lo que determina que su tratamiento ha de regirse, en primer término, por lo establecido en el RGPD y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Y la decisión sobre el acceso ha de regirse por lo dispuesto en el artículo 15 de la LTAIBG en el que el legislador español, en virtud de la habilitación dimanante del artículo 86 del RGPD, estableció las reglas para conciliar el derecho de acceso a la información pública con el derecho a la protección de los datos de carácter personal.

En concreto, dado que los aquí concernidos no pertenecen a las categorías especiales reguladas en el artículo 9 del RGPD ni son datos meramente identificativos (a los que se aplicaría la presunción del artículo 15.2 de la LTAIBG), ha de estarse a lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 15 de la LTAIBG, según el cual:

«Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.»

En el presente caso, hecho el previo juicio de ponderación teniendo en cuenta los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, se aprecia un interés público prevalente que justifica la divulgación de la información solicitada en términos tales que pueda ser conectada con personas físicas identificadas o identificables, por lo que no se ha de conceder una prevalencia completa a la protección de los datos de carácter personal sobre el derecho al acceso a la información. Ello es así porque, el interés general subyacente en el acceso que se ha invocado se pueden satisfacer en un grado alto, revelando parcialmente datos de carácter personal, procediendo a la correspondiente pseudonimización de los DNI en el ámbito de lo contenido en la LOPDPGDD, todo ello con base en la doctrina del CTBG recogida, entre otras, en la resolución 2023-0358 de 17 de mayo de 2023.

Por otro lado, se ha procedido a la supresión o velado de las firmas manuscritas de los documentos solicitados, así como a la supresión o velado del nombre y apellidos de la persona titular del cargo que adopta la resolución, pero manteniendo el cargo del que emana la misma, todo ello con base en el criterio CTBG 4/2015.

2. En lo referente al resto de documentación solicitada, no procede acceder a su solicitud, todo ello con base en los siguientes:

2.1 Antecedentes

Constan en los registros de la Entidad Pública que D. _____ ha presentado dos reclamaciones previas a la vía judicial, en fecha 20 de junio de 2022 (REGAGE _____) y 1 de junio de 2023 (REGAGE _____), con el siguiente solicito:

Por cuanto antecede, se SOLICITA que se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, estimadas las pretensiones, se reconozcan los siguientes derechos del que suscribe:

- *A obtener una antigüedad en la empresa igual a la del primero de los compañeros que fue contratado habiendo acreditado los requisitos bajo las mismas condiciones y en las mismas fechas que el que suscribe.*
- *A percibir la diferencia entre el salario percibido hasta la fecha y el que se debería haber percibido desde la fecha de incorporación del primero de los compañeros que fue contratado habiendo acreditado los requisitos bajo las mismas condiciones y en las mismas fechas que el que suscribe.*
- *A percibir los intereses por mora que corresponda, según estipula el art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.*

En dichas relcamaciones el solicitante interpreta que hubo una demora en su contratación, a diferencia de lo que ocurrió con los adjudicatarios de la plazas de controlador de transito aéreo de la Entidad Pública Enaire que se presentaron a las pruebas de acceso de convocatorias anteriores, lo que, a su entender, le causa un perjuicio en términos salariales al tener una antigüedad menor.

2.2 Argumentación

Sin perjuicio del derecho del interesado a instar la reclamación de su derecho en las instancias judiciales que entienda pertinentes, no puede obviarse el contenido de las reclamaciones previas a la vía judicial guardan una relación directa y palmaria con la documentación que por transparencia solicita. Es decir que existe una coincidencia del objeto de tales reclamaciones y la documenatación solicitada, entendiendo que **concorre el límite contemplado en el artículo 14.1.f) de la LTAIBG, pues acceder a la solicitud de acceso a la información pretendida puede causar un perjuicio a la igualdad de las partes en los procesos judiciales y a la tutela judicial efectiva.**

En este sentido y en estrictos términos de trasnparencia, el art. 14.2 de la LTAIBG exige que se pondere la prevalencia el interés público o privado en el acceso a la información o la protección de los bienes jurídicos amparados por el límite del Art. 14.1.f) de la LTAIBG, ello con independencia de la naturaleza procesal o extraprocesal de la información como determina la doctrina del CTBG, entre otras, Resolución de 3 de marzo de 2023 (R-0612-2022/100-007089).

Pues bien, para realizar esta ponderación debe tenerse en cuenta que el solicitante en sus reclamaciones previas entiende que ha habido una demora en su contratación utilizando como elemento comparativo cuándo se produjo la contratación de los adjudicatarios de plazas de controlador de tránsito aéreo de convocatorias anteriores a la suya. Concretamente dice:

Sin embargo, y a diferencia de procesos anteriores en los que la contratación fue prácticamente inmediata para todos los candidatos, no fue hasta el 01/09/2021 cuando el que suscribe fue convocado para la firma del contrato de trabajo.

Este retraso supuso un incumplimiento por parte de ENAIRe de lo establecido en el documento de oferta de formalización futura de un contrato de trabajo, mencionado anteriormente en el punto 3, y una inadecuada aplicación de las bases del proceso. Además, la propia ENAIRe había informado en una reunión inicial con los candidatos que la contratación se produciría en un muy corto espacio de tiempo desde la acreditación del cumplimiento de los requisitos.

Tal y como se menciona anteriormente, el retraso producido en las contrataciones, que en el peor de los casos superan el año de duración, ha supuesto una situación inédita hasta la fecha, como así reflejan los datos de contratación de ENAIRe en las convocatorias anteriores.

Por lo tanto, su reclamación tiene como base comparar el tiempo que transcurrió en la contratación de los adjudicatarios de convocatorias anteriores con el tiempo transcurrido en la suya, y es claro que ello sólo se puede llevar a cabo con la información solicitada, que comprende:

- *Fecha en la que el/la candidato/a seleccionado/a remitió todos los documentos a ENAIRe (licencia alumno controlador, anotaciones de idioma, certificado clase 3) para acreditar el cumplimiento con:*
 - *Convocatoria 2016: la base 4.2, según lo expuesto en el punto 11 “CONTRATACIÓN - MODALIDADES DE INCORPORACIÓN A ENAIRe” de las enunciadas bases que regían el proceso de selección.*
 - *Convocatorias 2017 y 2018: la base 3.2, según lo expuesto en el punto 10 “CONTRATACIÓN - MODALIDADES DE INCORPORACIÓN A ENAIRe” de las enunciadas bases que regían el proceso de selección.*
- *Fecha efectiva en la que ENAIRe procedió a la contratación de cada candidato/a seleccionado/a.”.*

De las circunstancias expuestas se desprende que el acceso a la información solicitada, cuando el solicitante ha iniciado los trámites para incoar un proceso judicial, comporta un riesgo real de producir una alteración del equilibrio de las partes en el mencionado proceso, perjudicando la posición procesal y de defensa de alguna de ellas, en este caso ENAIRe e incluso de otras que se pudieran ver afectadas por la conformación del litisconsorcio pasivo necesario. Y ello porque, con base en lo ocurrido en las convocatorias anteriores, el objeto de la reclamación previa es obtener una antigüedad en la empresa igual a la de la primera persona contratada.

De otra parte, ENAIRe entiende que la solicitud buscar acceder, a través de la transparencia, a datos burlando la potestad del juez de pronunciarse sobre la pertinencia, o no, de la prueba

conforme a las reglas del Art. 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, hecho que no se puede admitir.

En este orden de cosas, desde la perspectiva del interés concurrente, resulta relevante que la denegación de acceso a la información en la vía administrativa no priva del derecho del reclamante a la tutela judicial efectiva pues tiene a su disposición, en el proceso en el que es parte, los instrumentos adecuados para proponer la práctica de las pruebas que considere pertinentes, correspondiendo al órgano judicial la decisión sobre su admisión y valoración. Es decir que el solicitante tiene la posibilidad de requerir esta documentación en el trámite de presentación de la demanda o incluso antes de presentar aquella a través de la solicitud de diligencias preliminares dispuestas en el Art. 76 y 77 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con el 256 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que el juez, en ejercicio de la función jurisdiccional que la atribuye la Constitución, así lo entienda pertinente.

3. Resolución

Consecuentemente, atendiendo a las particulares circunstancias del caso, una vez ponderado el interés público y privado en juego, así como la razonabilidad de la aplicación del límite previsto en el artículo 14.1.f) alegado por la Administración, procede desestimar parcialmente la solicitud, procediendo a dar acceso a los documentos que anteriormente fueron públicos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo según el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.